

## Del saneamiento de la economía a la injusticia social

Javier Delgadillo Macías \*

La historia reciente del país da cuenta de una organización política, económica y social dirigida durante casi sesenta años por un mismo partido gobernante, con una lógica de acción secuencial en el tiempo y, al parecer, con un proyecto sólido aún vigente. Esta situación de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), permite interpretar desde distintas ópticas las características, cualidades u omisiones del sistema de gobierno mexicano. Así, por ejemplo, en los criterios de tipología de partido o de los modelos de desarrollo de los países se ha señalado a México como país de régimen dominante o de partido dominante de alto autoritarismo (Francisco Guerra); también podría señalarse como país de acentuada tendencia "neoliberal" y de "economía mixta" (CEPAL); desde la óptica oficial como país "democrático" y nacionalista (PRI); incluso desde una perspectiva más radical, como país con estructura de capitalismo monopolista de estado (Alonso Aguilar).

Sea cual fuere el criterio seleccionado para su clasificación, la realidad de las acciones que día a día se suceden permiten observar los grados de adecuación o inadecuación que el gobierno expresa, en lo referente a la política, la economía y la sociedad.

La lógica de acción del gobierno mexicano en sus políticas públicas responde a distintos factores, internos y externos, que le dan cierta particularidad temporal (sexenal) y que lo diferencian del conjunto de su tendencia histórica hegemónica. Respecto de las influencias externas es importante dejar constancia de las imposiciones o restricciones de política económica, resultado de la inserción de México en el sistema capitalista mundial. Esta dependencia externa afecta fundamentalmente —y en los últimos años con mayor agudeza— al sector social en su conjunto. Por lo tanto, las políticas sociales forman parte

de una estrategia general o global, que los proyectos particulares de cada gobierno sexenal presentan bajo el sustento de sus programas o planes. Estas referencias al sector social abarcan un espacio importante en la estrategia del plan, pero generalmente subordinadas respecto de las políticas económicas. En realidad, lo que debería ser una complementariedad lógica (y necesaria) entre lo económico y lo social, se ha presentado históricamente como dicotomía estructural.

Debería privar en el Estado una visión social que, en los hechos concretos, subordine lo económico-financiero sobre lo social en aquellos programas cuyo destino es resolver los problemas de la población; pero la realidad demuestra lo contrario. Veamos algunos ejemplos:

El aumento de la población en el país no ha tenido respuestas sociales al ritmo de su crecimiento: de 13 millones en 1900 se pasó a 51 millones en 1970 y a 89 millones en 1988. Hoy día, 55% de la población tiene menos de veinte años; no hay respuesta en erogaciones para salubridad, educación y otros servicios, ampliándose la brecha con respecto al ritmo de crecimiento poblacional; lo cual es considerado por el gobierno como problema "imposible por resolver". De acuerdo con las cifras oficiales, la tasa de desempleo se ha mantenido más o menos constante en los últimos cuatro años pero, alrededor de un 40% de la fuerza de trabajo cayó fuera de la economía formal, quedando en la vaga categoría del "subempleo".

El ingreso anual per cápita es menor a los 2 000 dólares (poco menos de la cuarta parte del de Estados Unidos), situación de por sí crítica pero que no demuestra como los privilegios que disfrutaban unos cuantos son financiados por las mayorías. Desde otra perspectiva, el 18% de la población más rica controla el 56% del total de ingresos del país. Se considera que un 11.2% de la población es extremadamente pobre, mientras que un 53.9% vive por debajo de los niveles mínimos fijados por el mismo gobierno. El 64% de la población no recibe atención médica, más del 50%

no consume carne o huevos regularmente, el 75% vive en casas sin drenaje y el 65% de los adultos no han terminado los seis años de educación primaria requerida por la ley constitucional. En términos absolutos, se ve una tendencia al aumento del porcentaje de mexicanos que viven por debajo del umbral de la pobreza.

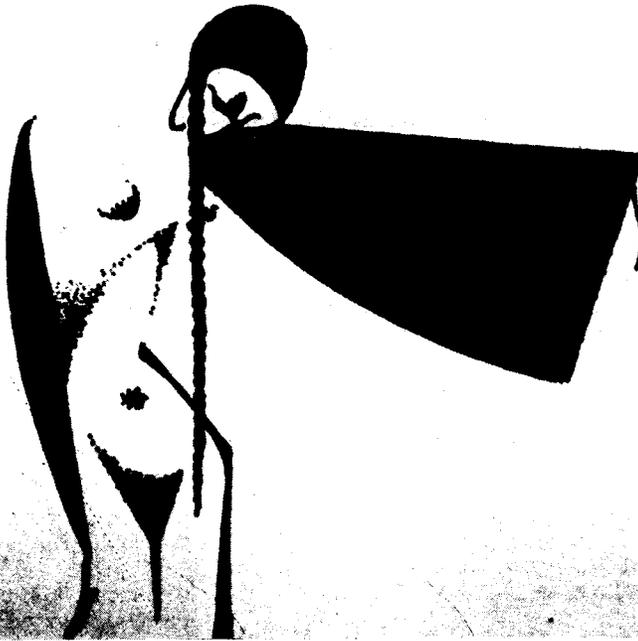
El déficit de vivienda es de alrededor de 9 millones y se estima que para el año 2 000 será de 13 millones. Respecto de la alimentación, el 66% de la población consume menos de 2 000 calorías diarias. Dos terceras partes de esa población mal nutrida vive en zonas marginadas urbanas.

Existe un 15% de analfabetismo total y 25% de analfabetismo funcional. El promedio de escolaridad es de sólo 5 años. El índice de rechazo educacional en los niveles medio-superior y superior es de más del 50% del total de demandantes. El atraso tecnológico y científico en la educación pública es de 10 años y la marginalidad educativa en la población indígena ha crecido sustancialmente.

Mientras que la depauperización relativa es exclusiva de la clase obrera (puesto que se relaciona con la extracción de plusvalía), la depauperización absoluta afecta a todos los sectores de la población.



\* Miembro del Área de Estudio sobre Desarrollo Regional del IIEc.



A nivel regional, existen zonas en las que la población indígena es mayoritaria y donde se observan graves deterioros en los niveles de vida de esas etnias, cambios en sus hábitos alimenticios y en muchos casos una mayor pobreza debido a la imposición a que se han visto sujetos, al incorporarlos a la economía de mercado, situación que los convierte en presa fácil de los acaparadores de cosechas y de los comerciantes. Esto ha influido en la agudización del fenómeno migratorio.

#### Palabras no son hechos

Bajo el sustento de que el país vive un régimen democrático de economía mixta y cobijado con la herencia de los postulados emanados de la Revolución Mexicana; el gobierno ha formulado en este sexenio (1983-1988) las políticas sociales, bajo los siguientes criterios que a continuación resumo:

La sociedad igualitaria constituye la finalidad última del desarrollo. "El objetivo no es ni podrá ser la uniformidad de todos; ello limitaría la vocación, la libertad y el desarrollo diverso de las potencialidades humanas". Permanentemente, se señala la lucha por la igualdad en función de la *equidad* en los procesos productivos y distributivos. En este sexenio se ha buscado la recuperación de la capacidad de crecimiento sostenido; para con ello generar empleos, redistribuir el ingreso entre personas y regiones y atender, prioritariamente, las necesidades básicas de los grupos marginados.

La política social cuenta con instrumentos tributarios y de gasto público, así como de eficiencia administrativa, pero su acción ha sido desigual y, por lo general, lenta debido a la inercia histórica del problema social.

Sobre la base de que "la mejoría en la distribución del ingreso entre personas y familias no puede lograrse solamente a través del crecimiento económico". En este sentido uno de los instrumentos que apoyan la búsqueda del "crecimiento con equidad" es el Servicio Nacional de Empleos y la "protección a la planta productiva"; en el ámbito de la organización de los grupos populares, la alternativa ha sido la reactivación de las cooperativas productivas. Sin embargo la respuesta, en ambos casos, ha sido poco satisfactoria, en el primero, por el cierre de paraestatales, entre otros factores, y en el segundo, por la imposibilidad de mantener el crédito social para estos grupos poblacionales.

Es reconocido el problema de la pobreza extrema que afecta a los diversos grupos étnicos del país. "Para superar esta situación, es necesario encontrar el equilibrio entre la integración del indígena al desarrollo y el respeto a su identidad cultural, evitando el paternalismo y promoviendo su participación como actor social con demandas y necesidades propias".

La educación es atendida en forma masiva en los niveles primarios y secundarios, pero sigue siendo uno de los *talones de Aquiles* de la política social. Ante la incapacidad de responder frontalmente a

este problema se declaran frases como la siguiente: "mientras existan en el país seis millones de analfabetas (en realidad son más de diez) y quince millones de adultos sin haber concluido la primaria será imposible alcanzar el objetivo de la sociedad igualitaria". El problema se acentúa en los niveles medio-superior y superior, fundamentalmente por el rezago y la dependencia científica y tecnológica. Se aprecia la urgencia de mejorar la formación profesional de los docentes y apoyar financieramente a las universidades públicas. Se está impulsando la educación terminal tecnológica en concordancia con los problemas regionales y globales del país.

En general, los objetivos de empleo y distribución del ingreso han sido considerados como la palanca clave para poder transformar el crecimiento económico en desarrollo social. No obstante, se observan algunas contradicciones: al no solucionarse estos problemas, hubo variables más controlables que contribuyeron a manejar con habilidad las presiones políticas y evitar que las demandas sociales más radicales aumentaran y se convirtieran en descontento social explosivo. La prioridad inmediata fue la estabilidad social, en lugar de la justicia social, y aunque se han construido escuelas, hospitales, y se han mantenido algunos subsidios para apaciguar a la mayoría pobre, son los sectores con más influencia los que han recibido mayor atención a sus demandas. Si los sindicatos, los movimientos campesinos y las organizaciones urbanas fueran más fuertes e independientes del Estado; éste se habría sentido presionado para hacer más por ellos. Incluso, en el caso de las erogaciones que se han efectuado para beneficio social, los resultados se han visto empañados por la ineficiencia crónica, la corrupción y la burocratización social.

No obstante, los programas sociales tienen en sí limitaciones estructurales y no pueden alterar la estructura económica del país, independientemente de cuan importante sea el compromiso político del régimen para combatir la pobreza *atrincherada*. La estrategia económica elegida parece obrar, una vez más, en contra de la mejoría social. La economía no sólo no ha podido crear el número suficiente de empleos, sino que por el contrario ha permitido, incluso, alentado la concentración de la riqueza. No puede ser coincidencia que México y Brasil, los dos países latinoamericanos que han registrado el crecimiento económico más rápido desde el decenio de 1950, tengan la distribución más desigual de los ingresos y la mayor riqueza de toda América.

Durante la última recesión, las pequeñas empresas familiares y la economía informal o paralela, tuvieron la capacidad de proporcionar un colchón de seguridad social. Así, las recompensas de la expansión les tocaron a los ricos mientras que el peso de la recesión lo cargaron los pobres. Y, aunque la crisis social es producto del modelo económico, el gobierno no ha pretendido atacar la raíz del problema; en cambio, la injusticia social ha sido aceptada como el precio a pagar por el "desarrollo económico".

Los subsidios se han usado sólo como forma indirecta para la distribución de los ingresos; véase, como ejemplo, el precio de las tortillas de maíz, el frijol y el aceite controlados por el gobierno; los transportes públicos en las zonas urbanas están subsidiados; la educación y los servicios de seguridad o salubridad son gratuitos e implican una transferencia de recursos de manos del gobierno a la sociedad. Con un 25% del presupuesto federal dedicado al "desarrollo social", y gastándose 8 veces más en educación que en defensa militar, se podrá afirmar de ciertas bondades del gobierno mexicano que llegan a impresionar.

Sin embargo, el resultado de las decisiones gubernamentales están influidas por la correlación de fuerzas de los agentes, competencias y alianzas, así como de los compromisos adquiridos y heredados con los

sectores que son puntales de su permanencia en el poder. Concilia con la iniciativa privada, con las empresas transnacionales, con la iglesia, con los sindicatos, con los sectores campesinos, etc. Su acción no es, por lo tanto, neutral sino consensual en virtud de que existen agentes que son decisivos e imponen reglas de acción (empresarios) y otros que son negociados de forma secundaria o complementaria. También, las formulaciones políticas se ven coaccionadas por un elemento más poderoso, el externo, que al igual que los grandes empresarios privados llega a dominar e imponer fuertes restricciones sociales.

Con todo ello, parece imposible llevar a la práctica una política social integrada, en tanto el gobierno no cambie de política. Nos gustaría que fuera capaz de controlar ciertas actitudes empresariales que son adversas a las mayorías; que mediara con el exterior y que dejara accionar el libre juego democrático de la movilidad social. Es decir, romper las estructuras rígidas y permitir una renovación y ascenso constante de los grupos sociales, al mismo tiempo que reanimara, paulatinamente, los valores sociales en la medida que se logre dar el salto entre lo tradicional (que es desigual social y regionalmente) y la modernidad que se está viviendo.

La lógica que ha mantenido el gobierno es adecuada a sus intereses de gobernar (el tiempo lo demuestra), igual para

los sectores empresariales y los organismos financieros internacionales; pero sumamente inadecuado para la mayoría de la población, incluyendo los sectores obreros y campesinos organizados y dependientes del gobierno. Tampoco es beneficioso para la política educativa, la de vivienda, la de salud, etc. Es decir, la integración es de *consenso dominante* pero no de correlación estructural entre los distintos agentes sociales. Es efectivamente una alianza política de conflicto.

Por ahora, el Estado mexicano permanece aún fuerte en su base de "masas" (aun cuando controladas y manipuladas) y dispone de un impositivo poder de negociación nacional e internacional que le permitirá, todavía, mantener por años el "nacionalismo revolucionario mexicano".

#### FUENTES

*Plan Nacional de Desarrollo, 1982-1988.* Secretaría de Programación y Presupuesto.

*V Informe de Gobierno.* Miguel de la Madrid, Secretaría de Gobernación 1987.

*Vecinos Distantes.* Alan Riding, 1986.

*Balance preliminar de la economía Latinoamericana, 1987.* CEPAL, Naciones Unidas, enero de 1988.

